

**V CONCURSO INTERAMERICANO DE DERECHO AL DESARROLLO  
SOSTENIBLE**

**CASO DE LA COMUNIDAD CAMPEESINA DE CANDELA VS. LA FEDERACIÓN  
DE CLONALIA**

**CASO NO. 042114/RLJ/0415 ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE  
DERECHOS HUMANOS**

**MEMORIAL DE LOS REPRESENTANTES DE LA  
FEDERACIÓN DE CLONALIA**

## **TABLA DE CONTENIDOS**

I. FUENTES CONSULTADAS .....	4
II. EXPOSICIÓN DE HECHOS.....	10
III. ANALISIS LEGAL DEL CASO .....	11
A. CUESTIONES PRELIMINARES DE ADMISIBILIDAD .....	11
1. La Corte no es competente <i>ratione materiae</i> para juzgar una supuesta violación del art. 11 del Protocolo de San Salvador y de otros artículos interpretados en conexión con éste .....	11
B. CUESTIONES SUSTANTIVAS .....	14
1. Clonalia no es responsable por las supuestas violaciones de derechos humanos a los miembros de la Comunidad que tienen lugar en territorio de Marsili .....	14
1.1. No existe nexo causal entre ninguna acción u omisión atribuible a Clonalia y los daños padecidos por la Comunidad. ....	14
1.1.1. Los daños que experimentan los peticionarios no se deben únicamente a los efectos adversos del CC .....	15
1.1.2. Clonalia no puede ser responsabilizada por la incidencia que los efectos adversos del CC pudiera tener en los derechos de los miembros de la Comunidad. ....	15
1.2. Marsili es el principal garante de los derechos de sus ciudadanos frente a los impactos meteorológicos y climáticos que acontecen en su territorio .....	18
1.3. Clonalia está dispuesta a cooperar con Marsili en la protección de los derechos de sus ciudadanos .....	19
2. La denegación por parte de Clonalia del estatus de refugiado a los peticionarios y su posterior deportación a Marsili no violaron el art. 22 CADH .....	20
2.1. De conformidad con el art. 22.77 CADH los motivos ambientales no pueden fundar la concesión del estatus de refugiado.....	20

2.2. Los motivos sustantivos de la deportación eran acordes al art. 22.8 CADH.....	23
3. El proceso de deportación de los migrantes de la Comunidad respetó los derechos y garantías previstos en la CADH.....	25
3.1. La aprehensión de los migrantes efectuada por las autoridades de Clonalia no vulneró el art. 7 CADH.....	26
3.1.1. La detención cumplió con las garantías del art. 7 CADH .....	27
3.1.2. La reclusión temporal de las personas migrantes ilegales era necesaria para asegurar la efectividad del proceso y el respeto a sus garantías mínimas.....	29
3.1.3. La actuación de Clonalia y de sus autoridades fue en todo momento proporcionada al fin perseguido .....	30
4. Clonalia no vulneró el derecho de libertad de pensamiento y de expresión (art. 13 CADH) .....	30
4.1. La legislación nacional prevé la limitación al acceso a cierta información .....	32
4.2. El motivo de seguridad nacional argumentado por Clonalia está amparado por el artículo 13.2.b CADH .....	32
4.3. La limitación al derecho de acceso a la información era necesaria para asegurar un interés público imperativo .....	33
IV. PETITORIO.....	34

## **I. FUENTES CONSULTADAS**

### **A. FUENTES REFERENCIADAS**

#### **1. Instrumentos Jurídicos**

Conferencia de las Partes n°16, celebrada en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre 2010. Decisión /CP.16, Acuerdos de Cancún: Resultados de la labor del Grupo especial de trabajo sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención. FCCC/CP/2010/7/Add.1.

Convención Americana sobre Derechos Humanos -“Pacto de San José”-, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José (Costa Rica) del 7 al 22 de noviembre de 1969.

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Viena, Austria. 23 de Mayo de 1969.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nueva York, Estados Unidos de América. 9 de mayo de 1992.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de Diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954.

*Convention Governing the Specific aspects of refugee problems in Africa (OAU Convention)* de 1969, de la *Organization of African Unity*.

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 22 de noviembre de 1984. Adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI). Nueva York, Estados Unidos de América. 16 de diciembre de 1966.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -"Protocolo de San Salvador", El Salvador, 17 de noviembre de 1988.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Firmado en Nueva York el 31 de Enero de 1967 Entrada en vigor: 4 de octubre de 1967.

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.

Resolución 44/172 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1989. Ejecución del Plan

de Acción para combatir la desertificación.

Resolución 44/206 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1989. Posibles efectos adversos del ascenso del nivel del mar sobre las islas y las zonas costeras.

## **2. Jurisprudencia**

### **2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos**

#### *Casos contenciosos*

Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

Corte IDH. *Caso Castillo Páez Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24.

Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.

Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.

Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.

Corte IDH. *Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia* (Excepción Preliminar). Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93.

Corte IDH. *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282.

Corte IDH. *Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283.

Corte IDH. *Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272.

Corte IDH. *Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238.

Corte IDH. *Caso Gangaram Panday Vs. Suriname* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16.

Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137.

Corte IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 258.

Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219.

Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.

Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.

Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177.

Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25.

Corte IDH. *Caso López Álvarez Vs. Honduras* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.

Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.

Corte IDH. *Caso Pueblo Indígena Sarayaku Vs. Ecuador* (Medidas Provisionales). Sentencia de 17 de junio de 2005.

Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.

Corte IDH. *Caso Vélez Loor Vs. Panamá* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218.

#### *Opiniones consultivas*

Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.

Corte IDH. *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.

Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5

Corte IDH. *La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6.

## **2.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

IACHR Hearings. *Human Rights and Global Warming*. March 1, 2007:  
<<http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=14>>

## **2.3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Budayeva y otros contra Rusia. Sentencia de 20 de Marzo de 2008.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Öneriyildiz contra Turquía. Sentencia de 30 de Noviembre de 2004.

## **2.4. Otros Tribunales**

Immigration and Protection Tribunal of New Zealand. AC (Tuvalu) [2014]. NZIPT800517-520.

Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Caso Pueblo Nativo de Kivalina contra ExxonMobil Corp. Sentencia de 15 de Septiembre de 2010.

Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. Caso Ned Comer contra Murphy Oil Usa. Sentencia de 16 de Octubre de 2009.

## **3. Doctrina**

ANNANDALE, David; MARKOVICH, Vivian. *Sinking without a life jacket? Sea level rise and the position of small island states in International Law*. Asia Pacific Journal of Environmental Law. Vol.5, Issue 2. Kluwer Law International, Año.2000.

ARENAS HIDALGO, Núria. *El cambio climático y los desplazamientos de población. La migración como estrategia de adaptación*. En GILES CARNERO, Rosa. *Cambio climático, Energía y Derecho Internacional: Perspectivas de Futuro*. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Primera Edición 2012.

## **4. Informes y otros documentos**

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). *Glosario de Términos*, 1995:

<[http://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/publications\\_and\\_data\\_glossary.shtml](http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_glossary.shtml)>

Informe del Banco Mundial: “*Bajemos la Temperatura: Como hacer frente a la nueva realidad climática*”. Conferencia Telefónica del Estudio, Jim Yong Kim.

IPCC (2008). Cambio Climático 2007. *Informe de Síntesis*, pág. 5. Ver también Seminario "Klimagune 2014" organizado por el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: Informe del Grupo de Trabajo II – Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad, “Conocimiento Actual de la respuesta al cambio climático” y Thomas Stocker, Copresidente del Grupo de Trabajo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Comunicado de Prensa del IPCC, 27 de septiembre de 2013.

KEANE, David. *The environmental causes and consequences of migration: a search for the meaning of “environmental refugees”*. The Georgetown International Environmental Law Review. Vol.16:209.

Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1988.

Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States. Submitted by Sheila Watt-Cloutier, with the support of the Inuit Circumpolar Conference (ICC). December 7, 2005.

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Trends in global CO2 emissions: 2013 Report. The Hague, 2013. Ver: <http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2013-trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf> (último acceso: 02/02/2015)

## **5. Webografía**

*National Adaptation Programmes Action (NAPAS)* de Naciones Unidas: [http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national\\_adaptation\\_programmes\\_of\\_action/items/2679.php](http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/2679.php) (último acceso: 02/02/2015)

*Nansen Initiative*: <http://www.nanseninitiative.org/>

## **B. FUENTES ADICIONALES**

### **1. Decisiones judiciales**

Corte Suprema de los Estados Unidos. Caso Massachusetts c. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Sentencia de 2 de Abril de 2007.

### **2. Doctrina**

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. *Guía de Defensa Ambiental: Construyendo la Estrategia para el Litigio de Casos ante el Sistema Interamericano*. Edición y Compilación: AIDA; México, 2008. P. 165. ISBN-13: 978-0-9823143-0-2.

GROPPI, Tania; LECIS COCCO-ORTU, Anna Maria. “*Las referencias recíprocas entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿de la influencia al*



*diálogo?*”. UNED. *Revista de Derecho Político* N.º 91, septiembre-diciembre 2014, págs. 183-230.

KÄLIN, Walter; DALE, Claudine Haenni. “Disaster risk mitigation – why human rights matter”. Climate Change and Displacement. Disponible en: <http://www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR31/38-39.pdf> (último acceso: 02/02/2015)

KILINSKI, Jennifer. “International Climate Change Liability: a myth or a reality?” Vol. 18.2. Florida State University College of Law, Spring 2009.

WIJENAYAKE, Vishakha “*Climate Justice under Environmental Human Rights: Extraterritorial Effects of Territorial Actions*”. October 10, 2014. <http://www.respectfullysubmitted.org/home/climate-justice-under-environmental-human-rights-extraterritorial-effects-of-territorial-actions> (último acceso: 02/02/2015).

SILVA GARCÍA, Fernando. *Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios esenciales*. Primera edición. México: Dirección de Difusión / Diseño: Armando Maya Ruiz / Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal; 2011. 595 p. ISBN 978-607-9013-03-5.

MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando. *La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados*. Revista electrónica cordobesa de Derecho Internacional Público. Vol.1 Núm.1, 2008.

MARCS, Carly. *Spoiling Movi’s River: Towards recognition of persecutory environmental harm within the meaning of the refugee convention*. American University International Law Review 24, núm.1, 2008.

### **3. Informes y otros documentos**

Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004).

Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations of the Rights of Arctic Athabaskan peoples resulting from rapid arctic warming and melting caused by emissions of black carbon by Canada. Submitted by the Arctic Athabaskan Council. April 23, 2013.

## **II. EXPOSICIÓN DE HECHOS**

1. La República de Marsili (en adelante Marsili) es un país insular, independizado en 1967 de la Federación de Clonalia (en adelante Clonalia), cuyo territorio está actualmente amenazado por una crisis socio-ambiental marcada por la subida del nivel del mar relacionada con el Cambio Climático (en adelante CC) y otros factores. Al norte de su principal isla, Theodore, se encuentra la Comunidad Campesina de Candela (en adelante Comunidad) siendo ésta extremadamente vulnerable a los fenómenos citados a causa de su ubicación y características.
2. La situación descrita ha motivado constantes flujos migratorios de la población de Marsili, tanto dentro como fuera del país. Actualmente 14000 personas viven en campamentos temporales a las afueras de Samantha (núcleo urbano de Theodore), a la espera de una reubicación definitiva. En el mes de octubre del año 2013, un grupo de 23 familias de la Comunidad llegó a Clonalia entrando de manera irregular en el país y sin hacer registro migratorio. Dichas familias iniciaron el procedimiento de petición de reconocimiento del estatus de refugiado por razones ambientales ante las autoridades de Clonalia, alegando la pérdida de sus tierras por la subida del nivel del mar. El Ministerio del Exterior (en adelante MEXT) de Clonalia inadmitió la petición por ausencia de solicitud válida ordenando que las autoridades migratorias iniciaran el proceso de deportación de las familias, en el marco del cual fue necesaria la detención de las mismas.
3. Debido a la tensión política generada, Clonalia designó una Comisión de Expertos Nacionales (en adelante CEN) para estudiar si la situación de los territorios insulares afectados por la subida del nivel de mar podía suponer un riesgo para la vida que pudiese eventualmente justificar una concesión de asilo. El estudio pretendía orientar futuras decisiones políticas migratorias de Clonalia y no pudo ser completamente publicado por razones de seguridad nacional.

### **III. ANALISIS LEGAL DEL CASO**

#### **A. CUESTIONES PRELIMINARES DE ADMISIBILIDAD**

##### **1. La Corte no es competente *ratione materiae* para juzgar una supuesta violación del art. 11 del Protocolo de San Salvador y de otros artículos interpretados en conexión con éste**

4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte o CorteIDH) no tiene competencia *ratione materiae* para conocer las alegaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) relativas a la supuesta vulneración del derecho un medio ambiente sano del art. 11 del Protocolo de San Salvador (en adelante, PSS), así como tampoco a las relativas a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) a la integridad personal (art. 5), a la propiedad privada (art.21) y al desarrollo progresivo (art.26) que supuestamente padece la Comunidad como consecuencia de los efectos adversos del CC. En virtud del art.42 del Reglamento de la CorteIDH y tras haberla planteado en su momento ante la Comisión<sup>1</sup>, cumpliendo con lo exigido por esta Corte<sup>2</sup>, Clonalia está legitimada a interponer la presente excepción en este momento procesal<sup>3</sup>.

5. De conformidad con la CADH y el propio PSS, el derecho al medio ambiente sano no es directamente exigible a través del sistema de peticiones individuales del art. 47 CADH. La jurisdicción contenciosa de la Corte, según el artículo 62.3 CADH, se limita a los conflictos de aplicación o de interpretación que puedan generar los actos internacionales que afecten a derechos reconocidos por la CADH, u otros instrumentos que reconozcan expresamente la

---

<sup>1</sup> Hechos del caso, párr. 68

<sup>2</sup> Corte IDH. *Caso Castillo Páez Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24; y Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25.

<sup>3</sup> Corte IDH. *Caso Castillo Páez Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24; y Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú* (Excepciones preliminares). Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25.

competencia de la Corte para juzgar. El artículo 19.6 del PSS introduce nuevos derechos a proteger por el sistema de peticiones del artículo 47 CADH, en concreto el derecho a la educación (art.13 PSS) y a la libertad sindical (art. 8 PSS), quedando excluido por tanto el derecho al medio ambiente sano del Art. 11.

6. Es cierto que en varias ocasiones la CIDH y CorteIDH han entrado a conocer conflictos derivados de daños ambientales en su vertiente subjetiva, por su conexión con otros derechos reconocidos en la CADH, como el derecho a la vida digna, a la integridad personal<sup>4</sup>, el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas<sup>5</sup>, o el derecho al desarrollo progresivo. En el caso *Yakye Axa c. Paraguay*, la Corte puso de manifiesto de forma expresa la necesidad de interpretar el derecho a la vida digna del artículo 4 CADH a la luz del artículo 11<sup>6</sup> y otros derechos del PSS.

7. Sin embargo, entendemos que esta línea interpretativa no debe ser extendida al presente caso dadas las marcadas diferencias que guardan los hechos y violaciones alegadas por la otra parte, asociadas al CC, con las de los casos referidos. Ello se puso claramente de manifiesto en la audiencia “*Human Rights and Global Warming*”<sup>7</sup> celebrada en la CIDH con ocasión de la demanda interpuesta contra Estados Unidos por Sheila Watt-Cloutier, en representación del pueblo Inuit<sup>8</sup>, cuyas peticiones, más allá de la audiencia citada, no fueron consideradas a fondo por ninguno de los órganos de control del SIDH. Como se evidenció en aquella audiencia, por su carácter global y su naturaleza difusa, el CC y sus efectos adversos

---

<sup>4</sup> CorteIDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay* (Fondo Reparaciones y Costas). Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 25.

<sup>5</sup> Corte IDH. *Caso Pueblo Indígena Sarayaku respecto Ecuador* (Medidas Provisionales). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de junio de 2005, párrs. 8, 9, 11, 12 y 13 y punto resolutivo 1b).

<sup>6</sup> CorteIDH, *Caso “Yakye Axa c. Paraguay”*, párr. 163.

<sup>7</sup> IACHR Hearings. *Human Rights and Global Warming*, [Sound recording]. March 1, 2007. Ver: <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=14> (último acceso: 1-02-2015)

<sup>8</sup> Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States. Submitted by Sheila Watt-Cloutier, with the support of the Inuit Circumpolar Conference (ICC). December 7, 2005. Ver: [http://www.ciel.org/Publications/ICC\\_Petition\\_7Dec05.pdf](http://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf) (último acceso: 1-02-2015)

constituyen un problema ambiental muy distinto a los que incidentalmente ha conocido la CIDH y la CorteIDH hasta la fecha.

8. Para establecer las violaciones de derechos humanos alegadas por la otra parte, la Corte está llamada necesariamente a realizar un juicio acerca de la responsabilidad de Clonalia en la generación del CC y sus efectos adversos, juicio que escapa completamente a sus competencias. El foro correspondiente para efectuar tal discernimiento es el del sistema de Naciones Unidas sobre CC. En efecto, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (en adelante, CMNUCC) es el instrumento que rige desde 1992 la acción de los Estados en la lucha contra el CC y sus efectos adversos. A través de él los Estados han asumido que tratándose de un problema global multicausal provocado por una pluralidad de actores las soluciones solo pueden ser abordadas internacionalmente de forma colectiva y concertada.

9. Los supuestos daños en que se fundamenta la demanda tienen que ver con el fracaso del conjunto de la comunidad internacional en el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC<sup>9</sup>. Mediante una artificiosa argumentación jurídica basada en derechos subjetivos, la otra parte pretende que esta Corte responsabilice a un solo Estado de un fracaso colectivo ante un problema global. La evaluación y atribución de responsabilidades respecto al fracaso internacional en la mitigación del CC y respecto a los problemas relacionados con sus efectos adversos deben ser realizados a través de los mecanismos de control de cumplimiento del CMNUCC y sobre todo, atendidas las complejas cuestiones políticas que se esconden detrás, a través de la Conferencia de las Partes y otros foros políticos internacionales. Así lo entendió la Corte Suprema de Clonalia al inadmitir a trámite la demanda interpuesta por 5 estados de

---

<sup>9</sup> A tenor del art. 2 del CMNUCC, el objetivo último del mismo es lograr la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático

la Federación de Clonalia<sup>10</sup>, en la misma línea que la práctica jurisprudencial de países de esta región como Estados Unidos<sup>11</sup>. En concreto en lo que concierne a los problemas que padece Marsili, debe notarse cómo la comunidad internacional está ya actualmente comprometida en la concertación de nuevos instrumentos de cooperación, como el *Green Climate Fund*<sup>12</sup> o la iniciativa *Nansen*<sup>13</sup>, con el objetivo de dar apoyo económico a los países en desarrollo para hacer frente a los efectos adversos del CC como la subida del nivel del mar.

10. Le solicitamos a la Corte pues que arroje luz sobre los extremos planteados y, en virtud de su independencia respecto al criterio de la CIDH<sup>14</sup>, revise la decisión de ésta última de entrar a conocer de las alegaciones correspondientes a los derechos arriba citados.

## **B. CUESTIONES SUSTANTIVAS**

### **1. Clonalia no es responsable por las supuestas violaciones de derechos humanos a los miembros de la Comunidad que tienen lugar en territorio de Marsili**

11. De no prosperar la excepción preliminar alegada en el apartado anterior, debe estimarse que la pretensión de atribuir a Clonalia un deber de garante respecto a los derechos de la Comunidad consagrados en los arts. 5, 21, 26 CADH y el art. 11 PSS, amenazados por una crisis socio-ambiental que tiene lugar en territorio de Marsili, carece de fundamento por los motivos que se exponen a continuación.

#### **1.1. No existe nexo causal entre ninguna acción u omisión atribuible a Clonalia y los daños padecidos por la Comunidad.**

---

<sup>10</sup> Hechos del caso, párr. 35.

<sup>11</sup> Demandas de responsabilidad por daños derivados del CC, interpuestas por ciudadanos contra empresa eléctricas han sido rechazadas los tribunales estadounidenses con base en la “doctrina de la cuestión política”. Ver en este sentido: Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Caso Pueblo Nativo de Kivalina contra ExxonMobil Corp. Sentencia de 15 de Septiembre de 2010.

<sup>12</sup> Creación del Green Climate Fund (GCF) en la Conferencia de las Partes número 16 como entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención en virtud del artículo 11. El GCF apoyará proyectos, programas, políticas y otras actividades en las Partes que son países en desarrollo.

<sup>13</sup> *Nansen Initiative*: <http://www.nanseninitiative.org/>

<sup>14</sup> Corte IDH. *Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia* (Excepción Preliminar). Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93.

***1.1.1. Los daños que experimentan los peticionarios no se deben únicamente a los efectos adversos del CC***

12. Uno de las afectaciones que experimenta la Comunidad es la pérdida de su territorio como consecuencia de la subida del nivel del mar. Es bien sabido que la subida del nivel del mar es, entre otros, uno de los efectos adversos del CC<sup>15</sup>. Ahora bien, las dificultades que atraviesa la Comunidad no derivan exclusivamente a la subida del nivel del mar derivada del CC, pues confluyen un conjunto de factores naturales y sociales.

13. No es menos importante el papel que juegan los eventos meteorológicos, desvinculados del CC, en la generación de las amenazas sufridas por los peticionarios. Siendo la República de Marsili una región tropical, se caracteriza por tener un período climático, llamado Monzón húmedo, protagonizado por precipitaciones abundantes y constantes inundaciones, que provocan la acidificación de la tierra<sup>16</sup>. A todo ello, es imprescindible remarcar que la precariedad socioeconómica de Marsili<sup>17</sup>, agrava el impacto de los fenómenos descritos y dificulta su reparación.

14. En definitiva, la Comunidad se encuentra amenazada por una crisis socio-ambiental en la que confluyen una pluralidad de factores, entre los que se encuentra el CC.

***1.1.2. Clonalia no puede ser responsabilizada por la incidencia que los efectos adversos del CC pudiera tener en los derechos de los miembros de la Comunidad.***

***a) El CC es un fenómeno global multicausal provocado por una pluralidad de fuentes***

15. De acuerdo con la definición realizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (en adelante, IPCC), “el cambio climático se debe a cambios internos del sistema climático o de la interacción entre sus componentes, o a cambios del

---

<sup>15</sup> Así lo precisa el último informe del G2C2 de 2014 que estima un aumento de más de 1.59 metros en el nivel promedio de los océanos para finales del 2030. Hechos del caso, párr. 19.

<sup>16</sup> Hechos del caso, párr. 3.

<sup>17</sup> Hechos del caso, párr. 7.

forzamiento externo debidos a causas naturales o a actividades humanas. En general, no es posible determinar claramente en qué medida influye cada una de esas causas”<sup>18</sup>. De esta definición se desprende pues que el CC es en parte un fenómeno antropogénico<sup>19</sup>, pero también intervienen en él un conjunto de factores naturales.

16. La incidencia humana en el CC proviene de múltiples fuentes. La principal de ellas es la elevada concentración de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) en la atmosfera que han sido emitidas por una pluralidad de actores durante un largo periodo de tiempo. Es cierto que los países industrializados, como Clonalia, han emitido históricamente más GEI que los países en vías de desarrollo<sup>20</sup>. Concretamente, a Clonalia le corresponde un 21% de las emisiones históricas globales, cifra a la que, cabe apuntar, contribuyó Marsili, como parte integrante de Clonalia hasta 1967<sup>21</sup>. Sin embargo, en la actualidad su cuota de emisión a nivel global se sitúa en un 18%<sup>22</sup>. Este dato denota que en el territorio de Clonalia el nivel de emisiones de GEI probablemente ha experimentado una tendencia descendiente al tiempo que en países como los emergentes la tendencia es claramente ascendente<sup>23</sup>. Por otro lado, nada desdeñable es la contribución que la actividad agrícola, sobre todo concentrada en países en vías de desarrollo, tiene en la acumulación de GEI en la atmósfera. Según datos del IPCC, la agricultura es responsable de un 14% de las emisiones totales<sup>24</sup>. En suma, observamos que todos los países del mundo acogen bajo su jurisdicción actividades emisoras de GEI y que a Clonalia solamente le atañe menos de una quinta parte de las emisiones globales, mientras

---

<sup>18</sup> Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). *Glosario de Términos*, 1995. <[http://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/publications\\_and\\_data\\_glossary.shtml](http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_glossary.shtml)>

<sup>19</sup> . Se sabe casi con absoluta certeza que la actividad humana es una de las principales causas del CC Hechos del caso, párr. 16. Estudio del G2C2 de 2014

<sup>20</sup> Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992, tercer considerando.

<sup>21</sup> Hechos del caso, párr. 2 y 8.

<sup>22</sup> Hechos del caso, párr. 21.

<sup>23</sup> “In China emissions increased by 3.0%, while in the United States emissions decreased by 4.0% and the European Union as a whole also saw a decrease of 1.6% in 2012 compared to 2011”. En PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Trends in global CO2 emissions: 2013 Report. The Hague, 2013. Link: <http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2013-trends-in-global-co2-emissions-2013-report-1148.pdf>

<sup>24</sup> IPCC (2008). Cambio Climático 2007. Informe de Síntesis, pág. 5



que las cuatro restantes proceden del resto de Estados.

En cualquier caso, las emisiones de GEI no son el único foco humano de generación de CC. Existen otros factores muy relevantes que han sido desatendidos en la demanda, como una de sus principales causas, la deforestación<sup>25</sup>. En efecto, se estima que un 18% del CC es causado por la deforestación<sup>26</sup>.

17. Por consiguiente, en la medida en que el CC es el resultado de la concurrencia de diversos factores que se suceden en el tiempo, causados por múltiples actores, no es posible determinar con precisión la contribución de cada uno de ellos. Es pues un error atribuir la responsabilidad por al CC a un solo actor, más aun centrando exclusivamente la atención en las emisiones de GEI, sin ponerlas en conjunción con el resto de fuentes humanas y no humanas que contribuyen a este fenómeno.

***b) No se puede establecer el nexo causal entre la contribución de Clonalia al CC y la subida del nivel del mar***

18. Resulta más complicado todavía establecer un nexo causal entre la contribución de cada Estado al fenómeno global del CC y sus efectos locales. Los GEI emitidos por Clonalia se concentran en la atmosfera junto con las emisiones presentes y pasadas de los otros Estados, deviniendo así indistinguibles. A su vez, los efectos adversos del CC se dan por una interacción compleja de factores naturales y antropogénicos. No se puede pues individualizar la causa directa y singular que genera esos efectos. Además, en relación con la subida del nivel del mar, al ser un efecto adverso de largo plazo<sup>27</sup> son más aun los focos que han contribuido a su desarrollo, siendo así todavía más remota la responsabilidad que pudiera tener Clonalia.

---

<sup>25</sup> Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992. Artículo 4.1.b).

<sup>26</sup> IPCC (2008). Cambio Climático 2007. Informe de Síntesis, pág. 5. Ver también Seminario "Klimagune 2014" organizado por el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

<sup>27</sup> IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Working Group I: The Physical Science Basis. pág. 7.

19. El débil vínculo entre la actividad de un Estado o actor determinado y los impactos locales del CC también ha sido tácitamente reconocido por la CIDH en el caso de los *Inuit contra Estados Unidos*<sup>28</sup>, demanda que se despachó con una audiencia informal ante la Comisión y que guarda cierta identidad con el caso presente. La CIDH evidenció entonces la falta de información para poder determinar si los hechos alegados generaban una violación de los derechos de la CADH, pues los peticionarios fracasaron en su intento de construir un vínculo causal entre las acciones u omisiones del Estado demandado y el impacto ambiental sufrido<sup>29</sup>. En el mismo sentido se pronunciaron los tribunales estadounidenses ante las demandas de responsabilidad planteadas por el *Pueblo Nativo de Kivalina contra ExxonMobil Corp.*<sup>30</sup> y *Ned Comer contra Murphy Oil Usa*<sup>31</sup>.

## **1.2. Marsili es el principal garante de los derechos de sus ciudadanos frente a los impactos meteorológicos y climáticos que acontecen en su territorio**

20. Como hemos expuesto anteriormente, los impactos ambientales que padecen los peticionarios son causados por el conjunto de factores meteorológicos y sociales propios del lugar en el que residen, que interaccionan con los efectos del CC.

De una lectura conjunta del artículo 1.1 CADH y el 2.1. PIDCP<sup>32</sup>, se desprende que el

---

<sup>28</sup> Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States, op. cit.

<sup>29</sup> IACHR Hearings. *Human Rights and Global Warming*, op. cit [Sound recording]. min. 33,27: “I would like to know how the commission can attribute responsibility to a whole region or to a State or isn’t to states which are not members of the UAS. I’d like very much to figure out how to divide, how to share this responsibility, and how to attribute this responsibility for everything that you have said. My second question, that I’d like very much if you could show me one or two or three good practices by some of the states which are responsible for these disasters. Good practices that could highlight the path for some actions by this Commission.” March 1, 2007. Ver:

<http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=14>

<sup>30</sup> Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Caso Pueblo Nativo de Kivalina contra ExxonMobil Corp. Sentencia de 15 de Septiembre de 2010. pág. 11675.

<sup>31</sup> Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. Caso Ned Comer contra Murphy Oil Usa. Sentencia de 16 de Octubre de 2009. pág. 22.

<sup>32</sup> A tenor de las normas de interpretación de los Tratados recogidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, la CADH debe interpretarse a la luz de otros convenios globales entre los mismos estados parte. Con lo cual, de acuerdo con el artículo 31.c) de la Convención de Viena, la CADH debe interpretarse de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI). Nueva York, Estados Unidos de

principal garante de los derechos de las personas es el Estado en el que se encuentran y a cuya jurisdicción pertenecen. Este deber de garante comporta no solo la obligación negativa de respetar los derechos, sino también obligaciones positivas de restablecer y reparar sus posibles violaciones. En cuanto al derecho a la vida y a la integridad personal, la Corte ha señalado además la obligación positiva de adoptar medidas adecuadas para garantizarlos cuando se encuentren amenazados por sujetos o circunstancias ajenas al propio Estado<sup>33</sup>. Así lo ha reconocido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>34</sup> (en adelante, TEDH) en casos en que estos derechos se vieron amenazados por causas meteorológicas.

21. Así pues, sin perjuicio de la cooperación de otros Estados, es Marsili, y no Clonalia, el principal obligado de prevenir los posibles daños así como de regular e incorporar medidas de adaptación y protección de sus ciudadanos respecto a las inundaciones y la subida del nivel del mar que experimenta su territorio con el fin de garantizar sus derechos<sup>35</sup>. Ello es así no solo en virtud de sus obligaciones que tiene con el cumplimiento de los derechos humanos sino también en virtud de las obligaciones contraídas en el marco de la CMNUCC<sup>36</sup>.

### **1.3. Clonalia está dispuesta a cooperar con Marsili en la protección de los derechos de sus ciudadanos**

---

América. 16 de diciembre de 196.

<sup>33</sup> Corte IDH. *Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. Párrafo 138.

<sup>34</sup> Desde los inicios de la actividad de la Corte IDH ha comenzado a citar la jurisprudencia europea, primero en el ejercicio de su función consultiva y después en el de su función jurisdiccional. Ver Corte IDH, Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69.; Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 113.; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 78; Corte IDH. *Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 54. Ver en este sentido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Caso Öneriyildiz contra Turquía*. Sentencia de 30 de Noviembre de 2004. Párrafos 65 y 71-74. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Caso Budayeva y otros contra Rusia*. Sentencia de 20 de Marzo de 2008. Párrafo 128.

<sup>36</sup> Artículo 4.1.b CMNUCC. Asimismo, de la “*National Adaptation Programmes Action*” de NN.UU., se desprende que la iniciativa en la elaboración de los planes de adaptación corresponde a los propios Estados vulnerables:

[http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national\\_adaptation\\_programmes\\_of\\_action/items/2679.php](http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/2679.php)

22. En cualquier caso, Clonalia conoce la situación y las dificultades que atraviesa Marsili para proteger a sus ciudadanos, y reconoce la responsabilidad de la comunidad internacional de cooperar con este Estado. Por ello, consciente de su favorable condición económica, Clonalia está estudiando la cuestión sobre la migración, el CC y la degradación ambiental a partir de un informe emitido por la Comisión de Expertos Nacionales (en adelante, CEN)<sup>37</sup>, creada *ad hoc*, con el fin último de concertar con Marsili la forma más adecuada de cooperación.

**2. La denegación por parte de Clonalia del estatus de refugiado a los peticionarios y su posterior deportación a Marsili no violaron el art. 22 CADH**

23. La inadmisión a trámite por parte del MEXT de la solicitud de estatus de refugiado de los migrantes de la Comunidad, exclusivamente fundada en la crisis ambiental que atraviesan las islas de Marsili<sup>38</sup>, y la posterior deportación de estas personas fue conforme a derecho por los motivos que se esgrimen a continuación.

**2.1. De conformidad con el art. 22.77 CADH los motivos ambientales no pueden fundar la concesión del estatus de refugiado**

24. El art. 22.7 de la CADH determina que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”. Este artículo debe ser interpretado pues de conformidad con la Ley 715 de Clonalia y la Ley de inmigración de 2009<sup>39</sup> encargada de incorporar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y su Protocolo adoptado en Nueva York en 1967, éstas últimas también relevantes para interpretar el art. 22.7 CADH.

---

<sup>37</sup> Hechos del caso, párr. 56.

<sup>38</sup> Hechos del caso, párr. 48.

<sup>39</sup> Hechos del caso, párr. 48 a 51.

25. De entrada parece evidente que el art. 22.7 no obliga a los Estados a extender la protección de la institución de asilo a migrantes por motivos ambientales, pues en nada se asemeja la situación de estas personas a las perseguidas por delitos políticos o delitos conexos.

26. La petición de los migrantes de la Comunidad debe ser también evaluada a la luz de Convención de Ginebra referente al estatus de refugiado que solicitaron. Su art.1 establece que el término refugiado se aplicará a toda persona que se encuentre fuera de su país de origen y no pueda o no quiera volver a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, siendo dicho motivos también los que les hicieron huir. Lo anterior entronca con aquello determinado por el artículo 22.7 CADH cuando exige causas políticas para la concesión del asilo.

27. Tanto en el art. 22.7 CADH como en la definición de refugiado de la Convención de Ginebra, nos encontramos con listas cerradas de motivos por los cuales debe ser otorgado un estatuto personal de protección. Las razones ambientales aducidas por los peticionarios para obtener la condición de refugiado en Clonalia no podían claramente subsumirse en ninguno de estos motivos. Siendo por tanto manifiestamente infundada la solicitud, las autoridades de Clonalia la archivaron directamente, no estando sujeta por tanto a garantía procedimental alguna al no existir proceso.

28. Ahondando en este alegato, ahora que se nos exige entrar en el fondo del asunto, la interpretación de la norma sobre refugiados propuesta por los peticionarios es contraria a las normas de interpretación de los tratados de la Convención de Viena de 1969. De conformidad con su art. 3., los tratados deben ser interpretados conforme al sentido corriente de sus términos y de acuerdo a su objeto y fin. Extensa doctrina afirma que una ampliación de los motivos por los cuales se reconoce la condición de refugiado atenta contra la literalidad del

art. 1 de la Convención de Ginebra y que la interpretación de este artículo admite muy poca flexibilidad, a riesgo de quedar comprometida la razón de ser del estatus de refugiado<sup>40</sup>.

Dentro de ese margen interpretativo, en sede de Naciones Unidas se ha dictaminado que “por las razones indicadas la expresión “debido a fundados temores de ser perseguida”, al distinguir un motivo específico, da lugar automáticamente a que todas las demás razones de huida sean ajenas a la definición. Excluye a personas como las víctimas del hambre o de los desastres naturales, a no ser que además tengan fundados temores de ser perseguidas por una de las razones señaladas”<sup>41</sup>.

29. También, según ARENAS HIDALGO, “la convención ginebrina no está pensada para atender a víctimas de desastres ambientales, ni siquiera cuando el Estado es incapaz de proporcionar asistencia. Sólo en la medida en que la degradación ambiental fuera utilizada como política discriminatoria del Estado o cuando éste impidiera la asistencia o protección de las víctimas de desastres ambientales con objeto de marginar a esa población, por algunos de los cinco motivos ginebrinos, podría entrar en juego la Convención de 1951 como instrumento de protección”<sup>42</sup>.

30. Más aún, cuando en diferentes ámbitos regionales<sup>43</sup> se ha ampliado mínimamente la definición de refugiado para proteger nuevas situaciones de persecución y riesgo, en ningún caso se ha reconocido este extremo para huidas por motivos ambientales.

31. En el presente caso la huida de algunos de los miembros de Candela a un tercer país no era necesaria, sino que, en un contexto de crisis socio-ambiental, fue fruto de una libre

---

<sup>40</sup> ANNANDALE, David; MARKOVICH, Vivian. *Sinking without a life jacket? Sea level rise and the position of small island states in International Law*. Asia Pacific Journal of Environmental Law. Vol.5, Issue 2. Kluwer Law International, Año.2000. Pág. 15.

<sup>41</sup> Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados” de 1988. Punto 39.

<sup>42</sup> ARENAS HIDALGO, Núria. El cambio climático y los desplazamientos de población. La migración como estrategia de adaptación. En GILES CARNERO, Rosa. Cambio climático, Energía y Derecho Internacional: Perspectivas de Futuro. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Primera Edición 2012. Pág. 228.

<sup>43</sup> Convention Governing the Specific aspects of refugee problems in Africa (OAU Convention) de la Organization of African Unity de 1969 y la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984.

elección, que excluyó alternativas existentes, como la de desplazarse a zonas menos vulnerables de Marsili. El Estado nacional de los solicitantes no está actuando en contra de estas personas, ni les está persiguiendo, ni les está negando ayuda por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por opiniones políticas, u otras que inviten a pensar que sólo la protección de un tercer Estado puede terminar con esa situación. Las supuestas víctimas solicitaron a Clonalia un estatuto de protección personal sin antes haber agotado las vías de ayuda de su propio Estado.

32. En conclusión, ni la figura del asilado ni la del refugiado pueden extenderse a personas que se han visto inducidas a abandonar su hábitat tradicional, de forma permanente o temporal, debido a un impacto ambiental (ya sea de origen antrópico o natural), que haya afectado seriamente su calidad y opciones de vida<sup>44</sup>.

33. Como ya se ha sostenido más arriba, ante la crisis socio-ambiental que afecta especialmente a la Comunidad, Marsili, en tanto que nacional de los peticionarios, es el primer obligado a procurarles una solución. Y de hecho así lo ha hecho respecto a los ciudadanos que allí permanecieron, ofreciéndoles protección y alojamiento en campamentos temporales<sup>45</sup>.

## **2.2. Los motivos sustantivos de la deportación eran acordes al art. 22.8 CADH**

34. En las circunstancias expuestas anteriormente, los miembros de la Comunidad que ingresaron sin el preceptivo visado, se encontraban en Clonalia de forma irregular<sup>46</sup>. En consecuencia reunían los requisitos previstos por la legislación nacional de Clonalia para ser retornados a Marsili.

35. El artículo 22.8 de la CADH determina que en ningún caso el extranjero puede ser

---

<sup>44</sup> KEANE, David. The environmental causes and consequences of migration: a search for the meaning of “environmental refugees”. The Georgetown International Environmental Law Review. Vol.16:209. Pág. 214.

<sup>45</sup> Hechos del caso, párr. 27.

<sup>46</sup> Hechos del caso, párr.47.

expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Es evidente que las supuestas víctimas no se hallaban en tal situación extraordinaria pues su vida o libertad personal no corría peligro en Marsili y ello mucho menos, por causa de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas.

36. En virtud del art. 31.3.b de la Convención de Viena<sup>47</sup>, el principio de no devolución, consagrado en el art. 22.8 CADH y en varios tratados internacionales, debe ser interpretado a la luz de las prácticas de los Estados en su aplicación. Para determinar si en el presente caso existía o no en Marsili riesgo de violación de los derechos citados que justificase la no devolución debe tomarse en consideración cómo otros Estados han abordado casos similares. Es relevante en este sentido el caso Tuvalu<sup>48</sup>, planteado ante los tribunales neozelandeses, en el que se denegó el permiso de residencia a solicitantes de la isla de Tuvalu expuestos a una situación comparable a la de los presentes solicitantes. El Tribunal de inmigración y protección en ese caso reconoció que el retorno a la isla situaría a los solicitantes en una situación de mayor precariedad, pero concluyó que no había pruebas suficientes para establecer que, debido a ningún acto u omisión de su propio Estado, tal precariedad o los peligros ambientales serían tan severos como para poner en riesgo su vida<sup>49</sup>. A juicio del tribunal, el conjunto de medidas adoptadas por Tuvalu (algunas de ellas gracias a la ayuda de la comunidad internacional), para adaptarse a la crisis climática y proteger a sus ciudadanos frente a sus impactos más inminentes, ponían de manifiesto que ese Estado había garantizado

---

<sup>47</sup> Este precepto establece que, junto al contexto, para la interpretación de los tratados debe tenerse en cuenta “toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado”.

<sup>48</sup> Immigration and Protection Tribunal of New Zealand. AC (Tuvalu) [2014]. NZIPT800517-520. (En adelante caso Tuvalu) Ver:

[https://forms.justice.govt.nz/search/IPT/Documents/Deportation/pdf/rem\\_20140604\\_501370.pdf](https://forms.justice.govt.nz/search/IPT/Documents/Deportation/pdf/rem_20140604_501370.pdf)

<sup>49</sup> Caso Tuvalu, párr. 100.



el derecho a la vida de sus ciudadanos y estaba en condiciones de seguir haciéndolo<sup>50</sup>, aunque fuese con el apoyo de la comunidad internacional en virtud del principio de cooperación<sup>51</sup>.

En la línea de lo señalado, en el presente caso, existen varias evidencias que denotan que las amenazas experimentadas por Marsili no son tan graves como para poner en riesgo el derecho a la vida de los miembros de la Comunidad, de ser devueltos. Marsili ha hecho notables esfuerzos para afrontar los efectos del CC en su territorio<sup>52</sup>, así como por mejorar las condiciones de subsistencia de la Comunidad. Por otro lado, nunca negó ayuda a los miembros de la Comunidad que migraron libremente a Clonalia. Marsili ha dispuesto un campamento temporal para dar cobijo y alimentos estos ciudadanos, a la vez que ha solicitado ayuda a la comunidad internacional para ofrecer soluciones definitivas<sup>53</sup>.

37. Así, no se puede considerar que se ponga en riesgo la vida de los migrantes al ser devueltos a Marsili por el simple hecho de que éste actúe con mayor o menor efectividad en la problemática que nos ocupa en función del grado de cooperación internacional de que disfrute en cada momento.

38. En conclusión, asiste a Clonalia el derecho a devolver a Marsili a los miembros de Candela que se encuentran ilegalmente en su territorio, ya que en su Estado de origen ningún riesgo les amenaza por las causas expresadas por el artículo 22.8 CADH. Al contrario, la devolución posibilitará que, juntamente con los miembros no desplazados, soliciten con más fuerza a su Estado que tome nuevas medidas de protección.

### **3. El proceso de deportación de los migrantes de la Comunidad respetó los derechos y garantías previstos en la CADH**

39. Parte de las cuestiones sustantivas a las que nos hemos referido en el apartado anterior

---

<sup>50</sup> Caso Tuvalu, párr. 99 a 108

<sup>51</sup> Caso Tuvalu, párr. 109

<sup>52</sup> Hechos del caso, párr. 26 a 28.

<sup>53</sup> Hechos del caso, párr. 27.

fueron determinadas por las autoridades de Clonalia a través del proceso administrativo de deportación de las personas migrantes ilegales. Éste es un proceso finalista conformado por diversos trámites: En primer lugar, los individuos son señalados y sus países originales de la ciudadanía identificados. En segundo lugar, las autoridades escriben una petición formal para que las autoridades del país de origen puedan identificar a las personas en cuestión. En tercer lugar, la autoridad nacional encargada del proceso notifica a las personas y a las fuerzas de seguridad la orden oficial para que inicien el proceso de aprehensión. Por último, una vez que la persona es aprehendida es conducida e ingresada en un centro de deportación temporal hasta que el proceso de deportación y las notificaciones se llevan a cabo. La detención es pues parte del proceso de expulsión<sup>54</sup>.

40. Conformes a este procedimiento, la identificación y comprobación de las identidades de los sujetos se realizó a través de la documentación presentada junta a la solicitud de estatus de refugiado en Clonalia. Seguidamente, se notificó a los migrantes una orden detención a través de los medios de comunicación, toda vez que carecían de domicilio en Clonalia<sup>55</sup>. Finalmente, la orden fue comunicada a los cuerpos de seguridad para que procediesen a la aprehensión de los migrantes y su posterior ingreso en un centro de estancia temporal previo a la deportación. El objetivo último de esta aprehensión era pues asegurar la ejecución de la orden de expulsión así como la presencia de los migrantes en el proceso administrativo y el debido cumplimiento de sus garantías de conformidad con el art. 8 CADH.

### **3.1. La aprehensión de los migrantes efectuada por las autoridades de Clonalia no vulneró el art. 7 CADH**

41. El art.7 CADH contiene en su párrafo primero una delimitación general del derecho de libertad personal, mientras que entre los numerales segundo y séptimo se desgana y

---

<sup>54</sup> Aclaraciones de las reglas y el caso n° 3.

<sup>55</sup> Hechos del caso, párr. 53.

pormenoriza el conjunto de garantías que lo protegen. El art.7.2 CADH por su parte permite la privación de libertad siempre y cuando esté previsto previamente en una ley.

42. La jurisprudencia de la Corte ha confirmado que este derecho no es absoluto. Los Estados están legitimados a privar de libertad a los ciudadanos siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos orientados a garantizar que el fin sea legítimo y que exista proporcionalidad<sup>56</sup>. Por consiguiente, la simple limitación al derecho no debe acarrear por si sola una violación<sup>57</sup>.

43. La Corte ha determinado en repetidas ocasiones que “la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, de modo tal que las medidas privativas de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere necesario y proporcionado en el caso en concreto a los fines de asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación y únicamente durante el menor tiempo posible”<sup>58</sup>.

44. Las aprehensiones fueron acordes a derecho puesto que cumpliendo con los requisitos previstos en el art. 22 CADH, respondieron además a fines legítimos y fueron proporcionales a éstos, tal y como se expondrá a continuación.

### ***3.1.1. La detención cumplió con las garantías del art. 7 CADH***

45. En primer lugar, la Corte ha definido como necesario el cumplimiento estricto del requisito de legalidad previsto en el art. 7.2 CADH para considerar una restricción al derecho

---

<sup>56</sup> Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 93; Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú* (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106.

<sup>57</sup> Corte IDH. *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párrs. 346 y 347.

<sup>58</sup> *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana*, párr. 359. La Corte toma como referencia: Corte IDH. *Caso Vélez Loo Vs. Panamá* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 171, y Corte IDH. *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 151.

de libertad personal como no vulnerador del propio derecho<sup>59</sup>.

46. La detención enmarcada en el proceso de deportación está prevista en la legislación migratoria nacional<sup>60</sup>. Esta normativa, al tratarse de una ley que forma parte del sistema jurídico de Clonalia, es acorde a la Constitución del Estado y a toda la normativa internacional en materia de Derechos Humanos suscrita (aspecto material). Además, define de forma objetiva las situaciones en las que los individuos objeto del proceso pueden ser privados de libertad para así garantizar el proceso (aspecto formal)<sup>61</sup>.

47. En segundo lugar, no existió arbitrariedad tal y como prescribe el art. 7.3 CADH. En relación con los derechos de los migrantes y la normativa nacional que los regula, la Corte ha establecido que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a los migrantes documentados en relación con los migrantes indocumentados, o bien entre migrantes y nacionales, “siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos”<sup>62</sup>. Acorde a la normativa nacional migratoria y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el trato diferenciado a las personas migrantes ilegales fue en todo momento justificable.

48. No nos encontramos ante una acción migratoria que tiene como eje central la detención obligatoria de los migrantes indocumentados sin una evaluación individualizada de sus circunstancias, práctica que la Corte ya ha considerado como ilegal y vulneradora de

---

<sup>59</sup> En este sentido: Corte IDH. *Caso Gangaram Panday Vs. Suriname* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47; *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana*, párr. 347 y Corte IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 258, párr. 100.

<sup>60</sup> Nos referimos a la Ley de Inmigración de 2009 que sirvió para incluir dentro de la legislación interna de la ya citada Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo Auxiliar de 1967.

<sup>61</sup> *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana*, párr. 347.

<sup>62</sup> En este sentido: Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 119; Corte IDH. *Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana* (Fondo Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 233; *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana*, párr. 402 y Opinión Consultiva OC-21/14.

derechos<sup>63</sup>, sino ante una medida concreta y adaptada a este caso en particular, con el único objetivo de asegurar la finalidad del proceso migratorio.

49. En tercer lugar, en fecha 5 de marzo se dictó la orden de detención de estas personas, y se le dio la mayor publicidad posible a través de los medios de comunicación<sup>64</sup> con el fin de asegurar el conocimiento por parte de los afectados, dando así cumplimiento al requisito de información a los afectados que se deriva del artículo 7.4 de la CADH.

50. Por último, estas personas fueron internadas en centros temporales de detención específicos para este tipo de situaciones, sin poner en riesgo en momento alguno su integridad física ni mental, una vez valorada individualmente su situación personal. En ellos, pudieron acceder a los medios necesarios para su defensa en el proceso de deportación, requisito indispensable según la Corte para no vulnerar las garantías del debido proceso<sup>65</sup>.

***3.1.2. La reclusión temporal de las personas migrantes ilegales era necesaria para asegurar la efectividad del proceso y el respeto a sus garantías mínimas***

51. Los miembros de la Comunidad debían ser localizados para poder garantizar la inmediatez del proceso de repatriación. Dado que éstos se encontraban en paradero desconocido desde el momento de su ingreso ilegal en Clonalia, las autoridades nacionales acordaron medidas específicas y temporales de privación de su libre circulación.

52. Estas medidas, respetando la jurisprudencia de la Corte antes citada<sup>66</sup>, no tuvieron carácter punitivo, puesto que se trataba de personas sujetas a un proceso administrativo de deportación aun abierto en el que las autoridades no se habían manifestado con carácter firme sobre su repatriación. No se trataría pues de simples detenciones, sino de medidas

---

<sup>63</sup> En este sentido: *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, párr. 171, y Corte IDH. *Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 131.

<sup>64</sup> Hechos del caso párr. 53.

<sup>65</sup> *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, párr. 146. La Corte toma en referencia: Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 126.

<sup>66</sup> Véase párr. 53.

provisionales y determinadas con el fin de asegurar su comparecencia en el proceso.

53. Además, para asegurar las garantías del proceso administrativo previstos en el art. 8 de la CADH, era necesaria la localización y comparecencia de las personas sujetas al mismo. Por tanto, a través de sus actuaciones Clonalia dio cumplimiento al fin legítimo de garantizar la efectividad del proceso y asegurar los derechos de los propios ciudadanos.

***3.1.3. La actuación de Clonalia y de sus autoridades fue en todo momento proporcionada al fin perseguido***

54. Además de ser conforme a los requisitos jurisprudenciales arriba referenciados, las medidas adoptadas por Clonalia cumplieron también con el requisito de proporcionalidad, tal y como también ha venido exigiendo la jurisprudencia<sup>67</sup>. La Corte ha definido como proporcionada una medida que se adopte, ante la imposibilidad de utilizar una medida alternativa menos restrictiva para lograr el fin perseguido<sup>68</sup>. Dado que desde el momento de entrada a Clonalia estos miembros de Candela se encontraron en paradero desconocido, fue imposible utilizar cualquier mecanismo alternativo de localización utilizado normalmente por las autoridades del Estado y debió recurrirse a formas extraordinarias de localización.

**4. Clonalia no vulneró el derecho de libertad de pensamiento y de expresión (art. 13 CADH)**

55. De acuerdo con el artículo 13. 1 de la CADH y con reiterada jurisprudencia de la Corte<sup>69</sup>, el derecho de acceso a la información es parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y expresión y comprende el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información bajo el control del Estado. Ahora bien, no es un derecho absoluto y debe

---

<sup>67</sup> Véase nota al pie n° 51.

<sup>68</sup> *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, párr. 171; y *Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia*, párr. 131.

<sup>69</sup> En este sentido: Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 77; Corte IDH. *Caso López Álvarez Vs. Honduras* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 163; Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 80 y Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 108-111.

ejercerse con las salvedades previstas en la CADH<sup>70</sup> y respetando sus posibles restricciones<sup>71</sup>.

56. El artículo 13 de la CADH debe interpretarse a la luz de la regla general de interpretación contenida en el artículo 32.2 del mismo texto, según el cual “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”<sup>72</sup>. Igualmente debe observarse la regla de interpretación específica del artículo 13.2 CADH<sup>73</sup>, en concreto en su letra b, donde se refiere a la protección de la seguridad nacional y del orden público como motivo justificador de limitación del derecho.

57. La Corte ha recordado, además, que el artículo 13.2 debe interpretarse conjuntamente con los artículos 29.b, 29.c y 32 CADH. Por lo tanto, “se desprende de la reiterada mención a las “instituciones democráticas”, “democracia representativa” y “sociedades democráticas” que el juicio sobre si una restricción a la libertad de expresión impuesta por un Estado es “necesaria para asegurar” uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del mismo artículo, tiene que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas”<sup>74</sup>.

58. Del artículo 30 CADH y de reiterada jurisprudencia de la Corte se desprenden los requisitos que deben cumplirse para considerar legítima esta restricción. Comprobaremos a continuación que Clonalia cumplió con ellos, es decir: la restricción estuvo previamente

---

<sup>70</sup> Nos referimos al art. 13.2 CADH.

<sup>71</sup> *Caso López Álvarez Vs. Honduras*, párr. 165; Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile* (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 85; *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*, párr. 95; y *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, párrs. 120-123.

<sup>72</sup> Este principio general del derecho internacional también ha sido apoyado por la jurisprudencia de la Corte, *inter alia*, en Corte IDH. *La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6.

<sup>73</sup> Según este artículo: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

<sup>74</sup> Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 42.

fijada por ley (apartado 3.2.1); respondía a un objetivo permitido por la CADH (apartado 3.2.2) y era necesaria para satisfacer un interés imperativo en una sociedad democrática (apartado 3.2.3)<sup>75</sup>.

#### **4.1. La legislación nacional prevé la limitación al acceso a cierta información**

59. La Corte ha interpretado que el concepto “leyes” del artículo 30 no puede tener otro significado que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado<sup>76</sup>. La legislación nacional de Clonalia prevé que el acceso a documentos relativos a las posibles futuras modificaciones legislativas o acuerdos diplomáticos en materia de migración puede ser susceptible de limitación<sup>77</sup>.

#### **4.2. El motivo de seguridad nacional argumentado por Clonalia está amparado por el artículo 13.2.b CADH**

60. El artículo 13.2.b CADH permite la restricción al ejercicio de este Derecho mediante leyes preestablecidas y necesarias para “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas”.

61. El documento objeto de esta disputa debía guiar una eventual reforma legislativa o acuerdo diplomático entre Clonalia y Marsili para abordar la cuestión migratoria en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Exteriores de la República de Marsili y la Federación de Clonalia (JCFAMC)<sup>78</sup>. De haberlo puesto a disposición de los peticionarios, la efectividad de las negociaciones políticas podría quedar seriamente afectada. El hecho de conocerse prematuramente la posición de Clonalia condicionaría sin duda su capacidad decisoria y negociadora frente a otros Estados. Además, podría haber provocado falsas expectativas o un

---

<sup>75</sup> Corte IDH *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Párrs. 89, 90 y 91. La Corte toma como referencia la Opinión Consultiva OC-5/85.

<sup>76</sup> Opinión Consultiva OC-6/86, párr. 27 *in fine*.

<sup>77</sup> Así se desprende de los hechos del caso párr. 58 y 59 y se confirma mediante el n° 7 del documento de aclaraciones de las reglas y el Caso.

<sup>78</sup> Hechos del caso, párr. 25.



irracional efecto llamada para ciudadanos de terceros estados. La pretensión de evitar este tipo de incentivos es completamente razonable, como muestra la práctica reiterada de todos los estados<sup>79</sup>, pues son una amenaza tanto para los migrantes como para el orden público y la seguridad de Clonalia, cuyo tejido social y económico no estaría capacitado para absorber una llegada masiva de migrantes ilegales.

#### **4.3. La limitación al derecho de acceso a la información era necesaria para asegurar un interés público imperativo**

62. Según la Convención, la restricción tiene que ser justificada por un interés público imperativo, que sea proporcional y estrechamente ajustada al logro de este fin.<sup>80</sup>

La limitación temporal de acceso al documento era necesaria, puesto que el acceso a la misma podría haber causado consecuencias irreparables para Clonalia y sus ciudadanos, como se ha argumentado en el apartado anterior. En todo caso, la medida fue además proporcional.

63. En primer lugar, la restricción de acceso al documento elaborado por la CEN no tuvo carácter indefinido ni vació de contenido el propio derecho. El Estado se comprometió a acabar haciendo pública la propuesta emitida por el CEN cuando dejara de existir el riesgo que propició tal limitación o, en el momento que la normativa estatal lo exigiese, en caso de que el informe o la información contenida en él pasasen a ser fundamento o documentación de acompañamiento del proceso de aprobación de una norma. Además, con la voluntad de garantizar la mayor transparencia posible, dentro de los límites que le permitía la seguridad

---

<sup>79</sup> Nótese el ejemplo de Nueva Zelanda. En 2014, el Tribunal de Inmigración y Protección de Nueva Zelanda concedió el visado de residencia a unos ciudadanos de Tuvalu que había sido solicitado con base a dos motivos: uno referente a los vínculos familiares con personas residentes en Nueva Zelanda y el otro referente a los riesgos de sufrir consecuencias adversas derivadas de las instituciones. El tribunal fundó la concesión del visado el primero de los motivos obviando pronunciarse sobre los motivos ambientales. Nótese la prontitud y el empeño de las instituciones neozelandesas y del propio Tribunal en matizar y difundir los verdaderos fundamentos de la sentencia (los vínculos familiares de los solicitantes) a fin de evitar la divulgación de interpretaciones desacertadas de la resolución que pudiesen inducir a ciudadanos de países similares a Tuvalu a migrar a Nueva Zelanda.

<sup>80</sup> Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 46.

nacional, Clonalia a través de una rueda de prensa hizo públicas algunas conclusiones de la propuesta de la CEN<sup>81</sup>.

64. En segundo lugar, debe ponderarse la necesidad de la restricción del acceso al documento con el impacto que dicha restricción tuvo en los solicitantes. Nótese en este sentido que el documento objeto de disputa era un documento meramente técnico con una vocación eventualmente política. Carecía por tanto en ese momento de efectos jurídicos y de relevancia en el seno del proceso administrativo en el que los solicitantes eran parte. Por consiguiente no no supuso una limitación a las posibilidades de participación o defensa en un proceso administrativo o judicial, a diferencia de muchos de los casos que se le han sometido a esta Corte en relación con el art. 13.2 CADH<sup>82</sup>. En efecto, cuando la Corte se ha manifestado especialmente restrictiva con la posibilidad del Estado de apelar a la seguridad nacional como motivo de limitación del acceso a la información, ha sido porque de ello derivaba una situación de vulnerabilidad e indefensión de los peticionarios grave en nada comparable con lo que sucede en el presente caso<sup>83</sup>.

#### **IV. PETITORIO**

65. Clonalia solicita a esta Corte que inadmita parcialmente la demanda interpuesta por la CIDH por falta de competencia *ratione materiae*; y declare al Estado no responsable de las supuestas violaciones de derechos alegados por la CIDH en su escrito de demanda.

---

<sup>81</sup> Hechos del caso, párr. 58.

<sup>82</sup> Nótese, por ejemplo, que en *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*, la Corte reconoció la violación de este derecho, en el marco del proceso de aprobación del “Proyecto Río Cóndor” cuando éste estaba en fase de información pública, momento clave para garantizar la participación ciudadana y las garantías democráticas.

<sup>83</sup> “Finalmente, el Tribunal también ha establecido que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en (...) seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes. Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito”. Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil* (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 202.